

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO TREINTA DE FAMILIA**

**Bogotá D. C., diez (10) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)**

**Rad: 11001-31-100-30-2021-00730-00**

**Clase de proceso: Acción de Tutela**

Procede este Despacho a proferir sentencia dentro de la Acción de Tutela instaurada a nombre propio por JEINER DUVAN VITERY CAICEDO contra la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

**ANTECEDENTES**

El señor JEINER DUVAN VITERY CAICEDO inicia acción de tutela contra la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, por considerar que se le está vulnerando el derecho fundamental de petición.

**HECHOS Y PRETENSIONES**

Indica el accionante que el 02 de agosto de 2021 radicó vía virtual un derecho de petición con radicado No.2021-01-476273 solicitando el levantamiento de las medidas cautelares decretadas al inicio del proceso, al correo electrónico webmaster@supersociedades.gov.co sin haber recibido respuesta.

Igualmente, el 26 de agosto de 2021 radicó un alcance al derecho de petición radicado el 02 de agosto de 2021, bajo el radicado No.2021-01-523340, sin que obre respuesta alguna.

**PRUEBAS**

La parte accionante anexa a su solicitud, los siguientes documentos:

- Copia de los derechos de petición radicados bajo los Nos. 2021-01-476273 y 2021-01-523340, junto con sus constancias de radicado.
- Copia de la cédula de ciudadanía del accionante.

**ACTUACIÓN PROCESAL**

1.- Admitida la tutela el 28 de octubre de 2021, se ordenó la notificación de la convocada, para que en término de dos (2) días se pronunciaran sobre los hechos materia de la presente acción.

2.- El 29 de octubre de 2021, se notificó a la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, a través del correo institucional del Juzgado, informando sobre la admisión de la presente tutela, adjuntando copia de la referida solicitud.

3.- La SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, brindó contestación a la acción constitucional dentro de la oportunidad conferida.

### **CONTESTACIÓN SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

La entidad accionada refirió: “No acceder a las pretensiones del accionante pues, el proceso de intervención es un proceso judicial en el que el accionante ha participado no como ciudadano interesado, sino como parte. En este orden de ideas, sus solicitudes no revisten el carácter de solicitudes presentadas en ejercicio del derecho de petición, sino que son actuaciones procesales que han recibido el tratamiento procesal que les corresponde.

La Superintendencia de Sociedades ejerce en los procesos de intervención y liquidación judicial, funciones eminentemente jurisdiccionales, en única instancia y en calidad de Juez Civil del Circuito. Por ende, frente a la procedencia del derecho de petición, y aun cuando éste sea un derecho constitucional, se advierte que este no puede ser solicitado dentro de un proceso judicial, como lo es el proceso de intervención judicial, por cuanto daría lugar a la vulneración del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

Al respecto, es necesario advertir que a través de un derecho de petición no es posible poner en marcha el aparato jurisdiccional o solicitar el cumplimiento de las etapas procesales y de las funciones propias del funcionario judicial, pues este se encuentra sometido a las normas de orden público procesal que rigen la actuación.

Lo anterior, ha sido reconocido por la Corte Constitucional en los siguientes términos: “el juez que conduce un proceso judicial está sometido a las reglas del mismo, fijadas por la ley, lo que significa que las disposiciones legales contempladas para las actuaciones administrativas no son necesariamente las mismas que debe observar el juez cuando le presentan peticiones relativas a puntos que habrán de ser resueltos en su oportunidad procesal y con arreglo a las normas propias de cada juicio”.

En igual sentido, vía jurisprudencial se ha manifestado que “(...) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales (...)”. Por lo tanto, las peticiones deben atenderse bajo las reglas que rigen el proceso.

En ese orden, el derecho de petición no procede frente a las autoridades judiciales, cuyo trámite no sigue la cuerda prevista para las peticiones que se elevan ante la administración pública, sino los procedimientos previstos en el estatuto procesal respectivo; en el presente caso, el Decreto 4334 de 2008, la Ley 1116 de 2006 y el Código General del Proceso, tal como lo ha indicado insistentemente la jurisprudencia constitucional, tal como se resulta, entre otras, de la sentencia T-377 de 2000.

Por lo anterior, se solicita a su Despacho negar la acción de tutela por improcedente. El proceso de intervención tiene naturaleza jurisdiccional. De este modo, el accionante pretende

que se apliquen las normas que regulan el derecho fundamental de petición a una solicitud presentada dentro de un proceso de carácter judicial. De acuerdo con lo sostenido por la Corte Constitucional, los términos del derecho de petición no son aplicables a aquellas solicitudes presentadas en el marco de procesos jurisdiccionales cuando se trata de asuntos propios del proceso.

(...)

**SOLICITUD SUBSIDIARIA DE LA PRINCIPAL:** No acceder a las pretensiones de la tutela por carencia de objeto por existir un hecho superado, en la medida en que las solicitudes presentadas por el accionante ya fueron atendidas por este Despacho mediante memoriales 2021-01-644451 y 2021-01-644447 de 2 de noviembre de 2021.

Al respecto, es de señalar que mediante oficio 2021-01-644447 de 2 de noviembre de 2021 se informó al Banco Agrario de Colombia la terminación del proceso de intervención y se requirió que se levante la medida cautelar sobre la cuenta número 379500000664, siempre que sea de propiedad del aquí accionante. Tal situación fue informada al tutelante mediante oficio 2021-01-644451 de la misma fecha. Adicionalmente, se puso de presente la improcedencia del derecho de petición y se requirió que informara los números de cuentas y/o productos adicionales a los que se refiere en aras de proferir los oficios pertinentes.

Dichos oficios fueron enviados y entregados conforme los certificados de entrega relacionados a continuación...”

## **CONSIDERACIONES**

### **Aspectos preliminares**

Este Juzgado es competente para conocer de la presente acción, por mandato de los artículos 86 de la Constitución Nacional, 37 del Decreto 2591 de 1991; numeral 1°, inciso 2°, del Decreto 1382 de 2000; y 38 de la Ley 489 de 1998.

La solicitud satisface las formalidades legales y no se advierten anomalías que invaliden lo actuado, lo cual habilita al Despacho para decidir de fondo el asunto.

### **Naturaleza jurídica de la acción de tutela**

La jurisprudencia constitucional ha pregonado de antaño que la acción de tutela fue instituida como un mecanismo extraordinario para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, en los casos previstos en la ley, sin que pueda erigirse en una vía sustitutiva de los medios ordinarios de defensa que el ordenamiento jurídico ha consagrado para salvaguardarlos.

Es claro, entonces, que este instrumento judicial se torna improcedente cuando la persona afectada tuvo o tiene la oportunidad de obtener la protección del derecho que estima amenazado, por los cauces ordinarios y ante las autoridades competentes, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

## **Procedencia de la acción de tutela.**

El art. 86 de la Constitución Política de Colombia, dispone: *“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.*

En el caso bajo examen, el ciudadano JEINER DUVAN VITERY CAICEDO, se encuentra legitimado en la causa por activa para interponer la acción de tutela, en virtud del citado postulado constitucional.

Por su parte, la legitimación por pasiva dentro del trámite de amparo hace referencia a la capacidad legal del destinatario de la acción de tutela para ser demandado, pues está llamado a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental en el evento en que se acredite la misma en el proceso. En el asunto de la referencia, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES es la entidad a la que se le aduce vulneración de los derechos invocados y de quien se solicita cese su actuar vulnerador.

## **Derecho Fundamental Invocado Como Vulnerado**

### **DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN**

Con relación al derecho de petición éste se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional y fue desarrollado por la Ley 1755 de 2015 donde dispuso el término con el que cuenta el destinatario de dicha petición para responderla el cual manifiesta: *“Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción...”*

En relación con este derecho fundamental ha precisado la Honorable Corte Constitucional:

*“El derecho de petición, pese a su autonomía tiene como fuente material los derechos políticos en la medida en que estos facultan al ciudadano para controlar, directa o indirectamente, las decisiones de las autoridades legítimamente constituidas por obra de la participación popular. El núcleo esencial de este derecho está ligado a la necesidad de mantener canales adecuados de comunicación entre gobernantes y los ciudadanos que trasciendan el ámbito político y vinculen al miembro de la comunidad con la autoridad.*

*El derecho de petición comprende no solo la manifestación de la administración sobre el objeto de la solicitud, sino también el hecho de que dicha manifestación constituya una solución pronta del caso planteado. El derecho fundamental a la efectividad de los derechos (C.P. Arts. 2 y 86) se une en este punto con el principio constitucional administrativo (Art 209).*

*La omisión o el silencio de la administración en relación con las demandas de los ciudadanos son manifestaciones de autoritarismo tan graves como la arbitrariedad en la toma de sus decisiones. Los esfuerzos de la Constitución por construir una sociedad más justa y democrática, necesitan ser secundados y de manera esencial*

*por el cumplimiento de la obligación de los funcionarios públicos de responder y resolver de manera oportuna las peticiones provenientes de los particulares.*

*Por lo menos tres exigencias integran esta obligación. En primer lugar, la manifestación de la administración debe ser adecuada a la solicitud planteada. No basta, por ejemplo, con dar una información cuando lo que se solicita es una decisión. Correspondencia e integridad son fundamentales en la comunicación oficial. En segundo lugar, la respuesta debe ser efectiva para la solución del caso que se plantea. El funcionario no solo está llamado a responder, también debe esclarecer, dentro de lo posible el camino jurídico que conduzca al peticionario a la solución de su problema. Finalmente, la comunicación debe ser oportuna. El factor tiempo es un elemento esencial para la efectividad de los derechos fundamentales; de nada sirve una respuesta adecuada y certera cuando ella es tardía". (Sent. T-220/94)*

### **Problema Jurídico**

Corresponde a esta Juzgadora determinar si las entidades accionadas han vulnerado el derecho fundamental invocado por el accionante, tales como el derecho de petición.

### **CASO CONCRETO**

En la Constitución Política de Colombia, en su Artículo 86, la acción de tutela, fue erigida como un instrumento de protección ante las autoridades judiciales, siendo subsidiaria, residual y autónoma, permitiendo el control constitucional de las acciones u omisiones de todas las autoridades públicas y excepcionalmente de los particulares. De contera, que jurisprudencialmente se ha decantado que la Acción de tutela, ostenta al menos cinco funciones importantes:

1. Proteger de manera residual y subsidiaria los derechos fundamentales de los habitantes frente a las acciones u omisiones de las autoridades públicas o de los particulares que puedan violarlos.
2. Afianzar y defender de manera coherente y ordenada, la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra norma jurídica.
3. Actualizar el derecho legislado, en especial el derecho preconstitucional, orientado a todos los servidores públicos para que lo interpreten y apliquen a la luz del derecho constitucional.
4. Unificar la interpretación sobre el alcance de los derechos fundamentales.
5. Promover una cultura democrática fundada en la protección efectiva de los derechos de las personas y en los valores del Estado social y democrático de derecho.

Ahora bien, esta especial figura está reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, consagrando en su Artículo 6º, las causales generales de improcedencia que tienden a racionalizar el uso de la acción, y que supeditan su viabilidad a la no existencia de otro medio de defensa judicial salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio *iusfundamental* irremediable.

Sin embargo, la regla general a la cual se ha hecho referencia, presenta excepciones:

a) Cuando el afectado sea un sujeto de especial protección constitucional, como lo son: los niños y las niñas, las personas que sufren alguna discapacidad, las mujeres embarazadas o los ancianos, por cuanto su situación de debilidad manifiesta impone el amparo mayor que la Constitución les brinda y, por ende, el estudio de fondo de sus asuntos.

b) Cuando la vulneración al derecho a la seguridad social implique un agravio a un derecho fundamental como la vida, el mínimo vital o el debido proceso<sup>1</sup>.

c) Cuando los medios de defensa con los cuales cuenta el accionante, se tornan ineficaces para lograr la protección inmediata de los derechos fundamentales comprometidos<sup>2</sup> o se pueda prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable<sup>3</sup>.

En el caso sub examine, se tiene que la accionante elevó ante la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, un derecho de petición el 02 de agosto de 2021 bajo radicado No.2021-01-476273, mediante el cual solicitaba el levantamiento de las medidas cautelares de la cuenta de ahorros del Banco Agrario de Colombia No.379500000664, igualmente se radicó ante la accionada memorial de alcance al derecho de petición ya mencionado el 26 de agosto de 2021 bajo el radicado No.2021-01-523340 mediante el cual solicitaba el levantamiento de las medidas cautelares decretadas.

De otra parte, conforme a la contestación allegada por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, se tiene que los derechos de petición incoados por el accionante fueron radicados dentro del proceso de Liquidación Judicial que se tramita respecto de Central de Inversiones en Red para Educación limitada "CINRED LTDA, Soluciones Financieras LTDA, Pedro Antonio Triviño Herrera, Jeiner Duvan Vitery Caicedo, Juan Carlos Ramírez Villamil y Jidy Méndez Dussan en Liquidación Judicial.

Conforme a lo anterior, se advierte por el Despacho que le asiste razón a la **SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**, sobre la improcedencia de la presente acción de tutela, como quiera que el derecho de petición no es procedente ante las autoridades administrativas en ejercicio de funciones judiciales toda vez que las partes pueden elevar solicitudes de manera directa al juez, en tal sentido, tendiendo en cuenta que las medidas cautelares decretadas y sobre las cuales solicita el accionante su levantamiento, fueron decretadas por la accionada en ejercicio de las funciones jurisdiccionales que le fueren atribuidas para tramitar el proceso de liquidación judicial, encuentra el Despacho que no hay lugar a acceder al amparo solicitado.

Sobre el particular ha manifestado la Corte Constitucional, en sentencia T-377-00, del 03 de abril de 2000:

*"El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las*

---

<sup>1</sup> Sentencias T-905 de 2008, T-850 de 2008, T-1083 de 2001 y T-038 de 1997.

<sup>2</sup> Sentencia T-1268 de 2005.

<sup>3</sup> Sentencia T-1083 de 2001.

*actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”.*

Adicionalmente, deberá tenerse en cuenta que, conforme a las documentales allegadas con la contestación de la demanda de la accionada, la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES mediante el Oficio No.2021-01-644451 procedió a dar respuesta a los derechos de petición incoados por el accionante, indicándole que procedió a oficiar al Banco Agrario informando sobre la terminación del proceso, respecto a la cuenta sobre la cual se solicita el levantamiento de la medida cautelar, igualmente se le requirió para que proceda a informar los números de cuentas y/o productos sobre los cuales se pretende el levantamiento de las demás medidas cautelares a efecto de proferir los correspondientes oficios, debiendo en consecuencia proceder el accionante de conformidad al requerimiento efectuado.

Así mismo, se evidencia que el Oficio No.2021-01-644451 fue remitido el 02 de noviembre de 2021 a la dirección de notificaciones indicada por el accionante en el derecho de petición y la presente acción constitucional, según se verifica con la constancia de envío de la indicada comunicación, al correo electrónico jeinervitery@gmail.com.

Conforme los antecedentes descritos y la documental que obra en el plenario, se pone de presente que no hay lugar a proteger el derecho de petición, toda vez que, conforme con la respuesta dada por la entidad accionada, se permite ver que se dio respuesta a la solicitud elevada por el accionante, tema sobre el que la Corte Constitucional ha explicado:

*“Esta corporación en reiterada jurisprudencia ha manifestado en relación con el hecho superado, que éste se origina con ocasión de la cesación de la acción u omisión impugnada de una autoridad pública o un particular, lo que consecuentemente torna improcedente la acción iniciada, pues no existe un objeto jurídico sobre el cual proveer”. (Sentencia T-173/93).*

*(...) si la situación de hecho que genera la violación o la amenaza ya ha sido superada, el instrumento constitucional de defensa pierde su razón de ser. Es decir, la orden que pudiera impartir el juez, ningún efecto podría tener en cuanto a la efectividad de los derechos presuntamente conculcados, el proceso carecería de objeto y la tutela resultaría entonces improcedente”. (Sentencia T – 988/02)*

Así las cosas, tenemos que la entidad accionada ha resuelto las solicitudes elevadas por la accionante, por lo que no hay lugar a la prosperidad de la acción impetrada, pues no se avizora la existencia de la violación al derecho de petición al haberle sido resuelta la petición incoada, por lo que, con fundamento en lo brevemente expuesto, este despacho denegará la tutela impetrada.

**EN MÉRITO DE LO EXPUESTO, EL JUZGADO TREINTA DE FAMILIA DE BOGOTÁ D.C., ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,**

**RESUELVE**

**PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE** el amparo solicitado por el señor **JEINER DUVAN VITERY CAICEDO** por las razones expuestas en esta providencia.

**SEGUNDO:** Contra el presente fallo procede impugnación por la vía jerárquica.

**TERCERO:** Remitir el expediente a la Honorable Corte Constitucional, para la eventual revisión del fallo de tutela, en caso de no ser impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación.

**CUARTO:** Notificar esta decisión a las partes por el medio más expedito. Líbrense comunicaciones.

**NOTIFÍQUESE,**

**VIVIANA MARCELA PORRAS PORRAS  
JUEZ**

**Firmado Por:**

**Viviana Marcela Porras Porras  
Juez  
Juzgado De Circuito  
Familia 030  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**017ff48a518d9d0a7372bfc13f6d338a46712c5e0f94b34eccec949c304ae4d8**

Documento generado en 10/11/2021 04:59:15 PM

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**